

NOVUS ORDO SAECLORUM

EMILIO ZEBADÚA

Pues debe considerarse que no hay nada más difícil de emprender, ni más peligroso de administrar, que el introducir un nuevo orden...

Maquiavelo, *El Príncipe*, cap. VI

Washington. El 17 de septiembre de este año se festeja en Estados Unidos la fundación de un *nuevo orden*: la adopción hace doscientos años de la Constitución Política. Y a pesar de la tormenta que subsiste sobre Washington, de los conflictos económicos con el Japón y del inicio de una campaña presidencial deslucida, se han montado en Nueva York y Washington, en Albany y Filadelfia, y hasta en San Diego y San Luis espectáculos y exhibiciones con la tecnología y la fanfarria del Hollywood y la Disneylandia del siglo XX para conmemorar la institución de un nuevo gobierno en el siglo XVIII.

En aquel entonces, del 25 de mayo al 17 de septiembre de 1787, en Filadelfia, la convención se reunió para deliberar sobre el futuro nuevo estado —trece entidades semiautónomas, 3 581 008 habitantes en 1790, un boyante comercio, vastas tierras por poseer al oeste de los Apalaches, extensas plantaciones algodonerías en el sur, y una deuda pública de 76 096 468 dólares. Ahora, el 25 de mayo y el 17 de septiembre de este año, Estados Unidos recrea por medio de desfiles, discursos y exhibiciones, con bombos y platillos, el bicentenario de la creación de la nueva república —cincuenta estados federados, una industria manufacturera en crisis, 21.5% del producto mundial bruto (en 1980) y 300 instalaciones militares en 35 países.

Se propuso incluir en las celebraciones bicentenarias a todas las regiones del país, sin que importe cómo se incorporaron a la Unión: Massachusetts por el voto de 187 delegados contra 168, Alaska como resultado de una compraventa en 1867 o Texas como consecuencia de la guerra con México. Las celebraciones también se han propuesto incluir a todos los grupos sociales, sin que importe el proceso de su naturalización: los irlandeses por inmigración voluntaria, los negros por inmigración involuntaria; los esquimales sin preguntarles, los indios en contra de su voluntad.

También se han incluido las ciudades, antiguas y modernas. En Nueva York los festejos se llevaron a cabo en la Biblioteca Pública, donde se exhibieron grabados, documentos y retratos de los Padres de la Patria; en Filadelfia, donde la conmemoración ha sido en las calles, hubo fuegos artificiales,

música de rock y desfiles de bandas; en Florida, donde se eligió el parque de diversiones de Epcot Center como sitio para la celebración, se exhiben objetos históricos.

Se rescató a los héroes nacionales del semiolvido. A James Madison, "padre de la Constitución", por ejemplo, se le rindió homenaje en su enorme plantación de Montpelier, Virginia. Madison fue el cuarto presidente de los Estados Unidos, diseñó los principales aspectos de la Constitución como la división de poderes (a su esposa Dolly se le acredita haber traído el helado de vainilla al país). Los líderes nacionales actuales, por su parte, se han incorporado, *American way*, para rendir honores al documento constitucional. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Warren Burger, por ejemplo, renunció al más alto tribunal para presidir la comisión encargada de los festejos (análoga a la que encabezó hace un año el presidente de Chrysler, Lee Iacocca, en los festejos para la Estatua de la Libertad). Los grandes asuntos públicos y las grandes actividades comerciales, al final de cuentas, se han legitimado unos a otras a través de la historia del país.

Con todo, los tiempos modernos ya no están en Estados Unidos para celebraciones ostentosas. Los negocios siguen marchando, pero ya no prometen como en 1787 o producen como en 1887. Y si es verdad que han sustituido a las locomotoras de Baldwin y a las imprentas de Hoe, de las que se enorgullecía el país el siglo pasado, el transportador espacial de Martin Marietta y las computadoras de Hewlett-Packard, también es cierto que la Revolución cubana, la guerra de Vietnam, el surgimiento de la OPEP, la recesión de los años setenta, Watergate y el crecimiento económico de Japón y Alemania Federal han impuesto un tono más sosegado en Estados Unidos. Si hace 100 años se exaltaba el progreso industrial y se anticipaba un futuro de bonanza, crecimiento y expansión, ahora el futuro ya no aparece tan prometedor y cierto.

Este año en que Estados Unidos celebra dos siglos de organización política, el país hace balance de su historia y del lugar que hoy ocupa en el mundo. Con el Informe de la Comisión Tower y los testimonios Irán-contras ante el Congreso, el país intenta resolver su más reciente crisis política. Con maniobras militares en Centroamérica y despliegues de fuerza en el Medio Oriente intenta ratificar su presencia militar. Con negociaciones privadas en Nueva York, Tokio, Washington y Bonn intenta preservar los negocios de Citibank y General Motors. Con su proyecto de la Guerra de las Galaxias intenta lanzarse hacia el futuro tecnológico. Y con las elecciones de 1988 aprovechará para renovar alianzas internas y planear el futuro.

*

En 1988 se transferirá el poder político en el país más poderoso del mundo. Para los demócratas se trata de la oportunidad de volver a ocupar la Casa Blanca después de ocho años y de ganar unas elecciones presidenciales después de cuatro derrotas en las últimas cinco elecciones. El año próximo, como en 1960, se enfrentará probablemente un vicepresidente republicano sin el carisma del

presidente que se retira, en contra de un contendiente demócrata que, sin repudiar totalmente el pasado, ofrecerá al electorado una "nueva era".

Por varios meses se han llevado a cabo reuniones en Arizona y Missouri, y en Washington y Nueva York para determinar la relación de fuerzas electorales que existe en vísperas de las campañas presidenciales de 1988. Los aspirantes a la Casa Blanca están tratando actualmente de medir el valor político de sus contactos a lo largo del país, de la lealtad de los miles de voluntarios que necesitarán para la campaña, del dinero que estiman poder recaudar y de la imagen pública que han logrado crear hasta ahora. Y, de este modo, en estos días los últimos demócratas y republicanos, liberales y conservadores, que todavía no lo han hecho, pero ya están participando de alguna manera en la campaña presidencial, declararán oficialmente su candidatura.

Entre la mayoría de los aspirantes a la nominación de sus partidos —Republicano o Demócrata— las diferencias son a la vez sólo de matiz (en cuanto a educación, personalidad, clase social) y suficientemente profundas para determinar quiénes serán los candidatos presidenciales. Sus carreras políticas, los intereses contraídos, sus orígenes geográficos, el tamaño de sus organizaciones, los recursos disponibles, los contactos de sus asesores, las preferencias de sus patrocinadores, y otros factores componen la *virtú* de los candidatos; la *fortuna* también intervendrá en los sucesos futuros.

Si a alguien ha beneficiado la crisis del gobierno de Ronald Reagan ha sido al Partido Demócrata. Las posibilidades de que alguno de sus precandidatos presidenciales alcance la Casa Blanca en 1988 son mayores ahora. La caída de la popularidad del presidente republicano y los problemas acumulados durante ocho años de gobierno han aumentado el atractivo de un demócrata como Michael Dukakis para el gran capital en Estados Unidos. Por lo demás, los intereses proteccionistas de candidatos como Richard Gephardt o George Bush los hacen candidatos formidables, pero a la vez implican grandes riesgos políticos —como bien pronto lo descubrió Gary Hart.

Sea lo que fuere, el candidato a vencer será con toda seguridad George Bush. Sus recursos económicos y su organización política siguen siendo las más grandes. Su carrera personal le ha ganado poderosos simpatizantes y lo ha atado a determinados intereses. Sus puestos dentro del Partido Republicano (delegado a la convención nacional en 1964 y 1968; presidente del comité nacional, 1973-1974) le han proporcionado una gran clientela entre políticos locales por todo el país. Sus puestos burocráticos (vicepresidente, 1981-1988; diputado federal, 1966-1970, embajador ante las Naciones Unidas, 1971-1973; director de la oficina de negocios con China, 1974-1975; director de la CIA, 1976-1977; candidato a la nominación presidencial del partido, 1980) le han permitido el acceso al funcionamiento de la más alta política de Estados Unidos. Y, finalmente, su actividad privada (Universidad de Yale, director del First International Bank, Houston, 1977-1979; vicepresidente de Zapata Petroleum Co., 1952-1959, y presidente de Zapata Off-Shore Co., 1954-1966) lo han acercado a las grandes multinacionales del este y a los petroleros del sur del país.

Bush ha tenido tiempo para visitar los más recónditos lugares de Estados

Unidos para ganarse el apoyo de los miembros del aparato republicano. Después de cientos de banquetes, discursos y presentaciones Bush es, sin lugar a dudas, un candidato formidable para 1988. Éste es el beneficio adicional de ser vicepresidente: viene con la chamba. Lo mismo sucedió con Harry Truman durante el gobierno del presidente Roosevelt, y con Richard Nixon en el de Eisenhower. La vicepresidencia los hizo presidenciables. Pero la vicepresidencia también acarrea grandes desventajas, como descubrió Walter Mondale, y éste es el estigma que persigue a George Bush.

Y es por eso que aunque cautos en sus juicios sobre las actividades de la administración Reagan, el Informe de la Comisión Tower y los testimonios ante el Congreso de North, Poindexter, Secord y McFarlane (éstos, es cierto, más difundidos) pueden contribuir a sellar el destino de Bush y de los republicanos en 1988. Puede ser entonces que una confusa pero asidua gestión a favor de los “intereses de Washington” en el Medio Oriente y Centroamérica —por encima de la ley y de la opinión pública— ocasione una transferencia de responsabilidades políticas de un partido a otro. Pero no es casual. Como tampoco es casual que los asistentes de Reagan —Meese, Nofziger, Deaver— estén siendo acosados judicialmente: todo parece apuntar al fin de la era republicana a medida que poderosos grupos insatisfechos con los republicanos retornan a la causa demócrata.

El capítulo más reciente de la aventura de Estados Unidos en el Medio Oriente —iniciado en 1985 cuando se autorizó a Israel para que vendiera armas a Irán, más la venta directa de armamento a Jomeini unos meses después con el fin de rescatar a varios rehenes y de proteger petróleo valuado en miles de millones de dólares— ha cobrado ya varias víctimas en las principales capitales del mundo. Varios generales fervorosos (americanos e israelíes) y algunos empresarios codiciosos (americanos, iraníes y sauditas) han pasado apuros a vistas del público; un devoto aliado se ha enfadado; un director de la CIA ha pasado a mejor vida; un jefe del NSC ha renunciado y otro, después de renunciar también, ha intentado suicidarse; la popularidad del presidente ha decaído, y la carrera del vicepresidente está en aprietos.

Sin embargo, para la clase dirigente, desde sus oficinas de Manhattan, los percances de Reagan, Casey, McFarlane o North no se comparan en importancia con las actividades de Daiwa, Nikko, Nomura y Yamaichi. Esa clase desea que Japón continúe invirtiendo su capital en la industria *Made in USA*, pero que no se apropie de ella. Goldman-Sachs está dispuesto a vender acciones a Sumitomo, y Shearson Lehman a Seguros Nippon; pero a cambio, empresas como Deere y Xerox desean tener acceso al mercado japonés. Y todos temen que la bolsa de valores de Nueva York ceda su primacía a la Kabutocho de Tokio o, peor aún, que el país corra la suerte del Imperio Británico. Esta perspectiva no se concretará en el futuro próximo, aunque el “nuevo orden” creado hace 200 años en Filadelfia ya presenta signos de agotamiento.

*

Los orígenes del orden mundial americano (11 % del comercio internacional y 30 % de los gastos militares totales en 1980) se remontan sólo al siglo pasado, pero este año se conmemora la fundación de la nación —la adopción de la Constitución que creó el sistema político. Se celebra también el bicentenario de la inscripción en la Constitución de la frase *novus ordo saeculorum*, modificada de la original de Virgilio, con lo que se ratifica la altivez y la confianza de los fundadores de Estados Unidos: líderes y legisladores de una nueva nación quienes, al salir triunfantes de la revolución contra los ingleses, se enfrentaron a la tarea de crear nuevas instituciones políticas que consagrarían “la libertad” de la Ilustración y permitirían la “búsqueda de la felicidad” burguesa.

Había que organizar un sistema de gobierno para proteger el comercio, pagar las deudas, repartir las tierras y asegurar los negocios. En la Constitución de 1787 los comerciantes del norte y los terratenientes del sur cerraron un trato que perduraría casi un siglo. Como símbolo, sin embargo, la obra constitucional ha logrado sobrellevar aún más: la guerra civil, las reformas del *New Deal*, la expansión global que siguió a la Segunda Guerra Mundial, las protestas urbanas de los años sesenta, la derrota en Vietnam y el escándalo de Watergate. La perdurabilidad del orden político americano, sin embargo, no se explica con referencias a Montesquieu y Madison, sino a Mosca y Morgan.

La historia de este éxito constitucional, en cambio, sí se remonta a los acuerdos y compromisos alcanzados en Filadelfia y Nueva York a finales del siglo XVIII. A mediados de ese siglo, la Guerra de los Siete Años (1763) exacerbó los conflictos entre la corona británica y los comerciantes yanquis. Aquélla necesitaba dinero para financiar la guerra y además ambicionaba una mayor tajada del comercio colonial, que en 1700 representaba un valor de 500 000 libras y en 1770 había aumentado a 2 800 000. Los empresarios de las colonias en pleno ascenso, en cambio, deseaban las tierras del oeste, que los británicos habían retirado temporalmente del mercado para ganarse el favor de los indios en su guerra contra los franceses, y tampoco estaban dispuestos a ver a los ingleses y a sus socios en el Nuevo Mundo enriquecerse todavía más con sus negocios.¹

Con el apoyo de una población armada y de la corona francesa, los empresarios yanquis se rebelaron. Los comerciantes en Boston y Filadelfia y los terratenientes en Virginia y las Carolinas, deslumbrados por un futuro de bonanza, y el rey de Francia, resentido y con la oportunidad de saldar viejas cuentas, sellaron una alianza revolucionaria. Con George Washington al frente de los ejércitos y Benjamin Franklin al frente de las negociaciones en París, los yanquis remontaron las derrotas de Bunker Hill, Brooklyn Heights y Harlem Heights; sobrevivieron el invierno en Valley Forge, y en 1781, en Yorktown, expul-

¹ Howard Zinn, *A People's History of the United States*, Harper & Row, Nueva York, 1980, pp. 59-60.

saron a los ingleses de las colonias. A partir de entonces habría nuevas reglas de juego para administrar los negocios sin los impuestos del gobierno de Londres y de las comisiones de los comerciantes ingleses.

El primer acuerdo de lo que serían décadas de negociaciones entre las élites regionales apenas independizadas fue el establecimiento de un gobierno bajo los Artículos de la Confederación —13 estados soberanos, una cámara legislativa y ninguna autoridad central para organizar el comercio, pagar las deudas y sostener un ejército. Sin el rey de Inglaterra para arbitrar las disputas, los “americanos” tuvieron que resolver solos sus diferencias: los dueños de las plantaciones del sur deseaban seguir vendiendo algodón y arroz a Europa sin pagar impuestos a los nortños, los poseedores de billetes del periodo revolucionario querían recuperar su inversión y los dueños de tierras exigían protección para poder extenderse. El fracaso de los Artículos de la Confederación para resolver los conflictos, las rebeliones de los granjeros, los ataques de los indios y la amenaza de la armada inglesa motivó a los americanos a reunirse en Filadelfia el 25 de mayo de 1787.

Y ahí, terratenientes, acreedores, comerciantes como Martin, Wilson, Hamilton, Washington, Sherman, Franklin y Madison, que antes se habían vuelto rebeldes ahora se volvieron legisladores para defender otra vez su libertad, su propiedad y su felicidad. Se dedicaron, pues, a crear un estado fuerte, capaz de pagar las cuentas y resolver las controversias. Transando, improvisando, posponiendo, prometiendo..., los constituyentes de Filadelfia dotaron al nuevo gobierno con la facultad de obtener recursos, reglamentar el comercio, declarar la guerra, repartir las tierras y proteger la industria. Y, entonces, el 17 de septiembre de 1787 se adoptaron las bases de un nuevo orden.

*

Cien años después, Estados Unidos celebró su Constitución en medio de un auge económico que anunciaba la venida del “siglo americano” y confirmaba el Destino Manifiesto. Los sucesores de John Hancock y Thomas Jefferson tendrían, sin embargo, que esperar el desenlace de la Segunda Guerra Mundial para ver su influencia extenderse alrededor del mundo. Entonces ya no lo harían tanto desde Boston, Filadelfia, Nueva York y Richmond sino mas bien desde Washington, Nueva York, Chicago y San Francisco.

Y entonces, los descendientes de Hamilton, Madison y Franklin volverían a reunirse, pero esta vez en Bretton Woods, Yalta y San Francisco para planear un nuevo futuro más ambicioso y organizar un orden global. Estados Unidos podía hacerlo, pues al finalizar la Segunda Guerra Mundial producía 60% del total de manufacturas en el mundo occidental. Además dominaba los mercados mundiales de petróleo, automóviles, computadoras, y las finanzas.

Según la visión de los nuevos líderes, en Nueva York y Washington, la reconstrucción económica y política de Europa Occidental y de Japón se volvió tarea primordial —produciendo y comerciando de nuevo serían sus nuevos socios y aliados. Se ideó entonces un plan completo que George Marshall hizo

público en Harvard. Miles de millones de dólares en inversiones y múltiples aranceles aseguraron el despegue capitalista de Asia y Europa; nuevas constituciones políticas confirmaron la nueva amistad con Japón y Alemania.

Dentro de Estados Unidos se consolidó una gran alianza de fuerzas políticas que aseguraría la estabilidad durante todo el periodo que siguió a la Segunda Guerra Mundial y se extendería hasta principios de la década de los años setenta. Las grandes industrias y bancos multinacionales, la gran confederación obrera y grupos "minoritarios" se agruparían detrás de una fórmula que produciría una bonanza nacional. Para las grandes empresas transnacionales, libre comercio; para los trabajadores, sindicalismo y prestaciones; para las minorías organizadas, derechos políticos y seguridad social. Y para los republicanos y demócratas, la alternancia en la ocupación de la Casa Blanca, siempre y cuando sus candidatos se apegaran al esquema hegemónico (y si no, ahí está el caso de Barry Goldwater en 1964).

Mientras la expansión económica continuó, los empresarios multinacionales de Estados Unidos (General Electric, IBM, PanAm, Standard Oil de California, Chase National Bank, Brown Brothers Harriman) siguieron mandando y prosperando; los empresarios nacionales de Estados Unidos (textiles, acero, zapatos) protestaban pero acababan transigiendo. Y cómo no, si durante el periodo de 1938-1967 el volumen del comercio internacional creció a una tasa doce veces mayor que la del periodo 1913-1967. El valor real de la inversión directa de los Estados Unidos en el extranjero se duplicó en los años cincuenta, y se duplicó de nuevo en los años sesenta. Sólo en la década de 1960 los activos extranjeros de los bancos americanos crecieron de 3 500 millones a 52 600 millones de dólares.²

Esta era llegó a su fin con el aumento del precio del petróleo y la recesión de 1973-1975. Dentro de los Estados Unidos, las medidas económicas del gobierno de Richard Nixon —devaluación del dólar y aumento de aranceles— anunciaron el rompimiento de la gran coalición interna que había gobernado el país desde los días del *New Deal*. Y los acuerdos internacionales basados en el comercio libre se vinieron abajo también. Las ganancias de las empresas americanas cayeron después de 1965. La productividad cayó de 2.45% del periodo 1948-1973 a 0.08% en el periodo 1973-1979. El crecimiento anual promedio del producto nacional bruto real cayó de 4.1% en 1960-1973 a 2.3% en 1973-1980.³

A partir de entonces, los empresarios nacionales, recién fortalecidos, se propusieron obtener mayor influencia en Washington. Los empresarios multinacionales tuvieron, por su parte, que esperar a Watergate, la vicepresidencia de Nelson Rockefeller y las elecciones de 1976 para volver a dictar sus condiciones. Pero ya no lo hicieron conclusivamente. Los conflictos que han caracterizado a la presidencia de Reagan han demostrado que la hegemonía de los

² Thomas Ferguson y Joel Rogers, *Right Turn*, Hill and Wang, Nueva York, 1986, p. 50.

³ *Ibid.*, pp. 79-80.

grupos del *New Deal* ya no existe. Los industriales nacionales, protegidos por subsidios y tarifas, han sobrevivido, tienen gran peso hoy día en Washington y están preparados para las elecciones de 1988.

Pero Estados Unidos no se puede gobernar sin la aquiescencia de Nueva York como Ronald Reagan lo comprobó rápidamente. Por eso incluyó a George Bush en la boleta electoral, por eso se desentendió de sus compromisos con Taiwán, y por eso —lo que es más importante— amplió su base de apoyo político (originalmente formada por sus amigos millonarios de California, la pequeña burguesía y gran parte de la industria textil, la petrolera y la de armamentos) para incluir a las grandes corporaciones multinacionales.

Con el rompimiento de la gran alianza gobernante formada en los años treinta y la elección en 1980 de Ronald Reagan, comenzó una profunda transformación nacional: se aprobó legislación fiscal regresiva, se redujeron los programas sociales, se atacó a los grupos minoritarios y a los sindicatos. Pero en 1987 los altos niveles de desempleo y el déficit público abrumador han demostrado el fracaso de los programas reaganianos. Por lo tanto, las elecciones de 1988 devolverán seguramente la Casa Blanca a algún demócrata (probablemente a alguien como Simon o Michael Dukakis comprometidos con los grandes intereses multinacionales). La coalición que llevó a Ronald Reagan a la presidencia en 1980 y 1984 ya se ha resquebrajado: las investigaciones del Congreso en el *affaire* Irán-contras, la suerte de Meese y Deaver, y el abandono de la figura presidencial por parte de los candidatos republicanos —Bush, Dole, Haig— son sólo las consecuencias del fin de la “revolución conservadora”.

Pero la política no respeta plazos legales. En los momentos actuales, el gran debate que se lleva a cabo en Washington sobre el déficit público afecta las investigaciones del Congreso, las diferencias políticas entre Weinberger y Shultz, las campañas presidenciales, las relaciones con Japón y Europa, la popularidad de Reagan y las negociaciones sobre las armas nucleares. Y quienes están más interesados en hallar una solución favorable a sus intereses y están mejor preparados para influir en el debate son los grandes bancos —Chase Manhattan, Shearson Lehman Brothers, Merrill Lynch.

Lo que los grandes bancos —núcleo de los empresarios multinacionales en Estados Unidos— quieren está muy claro. Quieren que Washington reduzca el déficit público, que Tokio y Bonn aumenten las importaciones, que Estados Unidos disminuya los aranceles y Japón continúe invirtiendo en el mercado financiero americano. Para defender sus intereses en el presente, los grandes bancos están trabajando; para asegurarlos en el futuro están participando en la sucesión presidencial. Recientemente, en lugares tan distantes como Osaka, Wilmington y Venecia, los banqueros, para su beneplácito, mas no para su total comodidad, se han anotado varias victorias.

Hace algunas semanas, en la bolsa de valores de Osaka se puso a la venta un paquete de cincuenta de las principales acciones de Japón. Según la casa financiera japonesa Daiwa, el comercio de estas acciones a futuro podría alcanzar la cifra de 700 millones de dólares diarios. Fuera de esto y aunque la participación de los bancos Morgan Stanley y Salomon Brothers es limi-

tada, se trata del primer paso en la apertura del mercado financiero japonés —una de las principales demandas de Wall Street.

También hace poco, pero en esta ocasión en Wilmington (Delaware) el senador Joseph Biden declaró oficialmente su candidatura a la nominación presidencial del Partido Demócrata. En su discurso inaugural, Biden dijo que lucharía en contra de los “intereses particulares”; lo que, en otras palabras, y como también él mismo dijo, significa que se opone a las medidas proteccionistas —otra de las exigencias de los grandes bancos. Biden está ahora fuera de la contienda, pero los banqueros todavía tienen candidatos declarados (como Dukakis) y candidatos posibles (como Mario Cuomo) que defienden sus intereses.

Finalmente, no hace mucho, en Venecia, Reagan redujo las tarifas que había impuesto en abril como sanción simbólica a ciertos bienes electrónicos japoneses. En juego está la industria manufacturera más importante de hoy: los superconductores. Y empresas de comunicación como AT&T y políticos como Richard Gephardt —diputado demócrata y candidato a la nominación presidencial— no están dispuestos a perder en este campo ante el poderío industrial japonés. Así que aunque no se alcanzaron los acuerdos deseados en la junta cumbre de Venecia, los intereses proteccionistas en Estados Unidos sufrieron una derrota —otro de los deseos de la banca multinacional.

El gran debate en Washington gira actualmente en torno al déficit público. Los grandes bancos de Nueva York quieren que los japoneses continúen trayendo sus dólares a Estados Unidos. Hasta ahora ya han invertido 50 mil millones de dólares en bonos de la Tesorería —financiando de hecho el déficit presupuestal del país. Wall Street se opone, pues, a que se inicie una guerra comercial con Japón como resultado de medidas proteccionistas de Washington o a que se desate la inflación en Estados Unidos como consecuencia de un gasto militar excesivo. Por eso los banqueros tienen cifradas sus “esperanzas” en que Shultz gane a Weinberger, Dukakis a Gephardt, Reagan a Nakasone y en que en Washington el debate se decida en su favor.

*

El comercio, la expansión territorial, la inmigración, la Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, las multinacionales, la recesión de 1973. . . han transformado a Estados Unidos en 200 años. Los Hancock y Jefferson no hubiesen podido imaginar jamás el nuevo orden de IBM y Bank of America cuando fundaron la nueva república. Los ferrocarriles, el petróleo, el algodón, las computadoras, el oro, los aviones, los misiles. . . han producido otro país y otros gobernantes. El éxito de la Constitución Política no se debe buscar tanto en el texto o en las instituciones que creó cuanto en quienes han sabido ser responsables hacia su país aun cuando se han enriquecido sin límites.

Hoy mientras se celebra la Constitución, la clase dirigente americana, en

Nueva York, California, Texas y Washington, discute el estado de los negocios y planea las campañas presidenciales. Sabe de los peligros que amenazan su orden mundial: el déficit público, el poderío japonés, la carrera armamentista, los conflictos en Centroamérica y el Medio Oriente, las demandas de los trabajadores americanos. . . Y sabe que la perdurabilidad de su régimen depende de cómo se resuelvan estos asuntos.